Proyecto de ley sobre modificaciones a la ley N° 17344, sobre cambio de nombre en función de identidad de género

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene por objeto resguardar la protección y la promoción de los derechos humanos de la población transexual en Chile. El derecho al cambio de nombre y sexo registral por la causal de incongruencia con la identidad de género de la persona, es decir, ser “equivoco respecto al sexo”, se encuentra directamente relacionado con los derechos más básicos del ser humano como el derecho a la integridad síquica, el derecho al nombre y el derecho a la igualdad ante la ley.

Es fundamental comprender que la correspondencia del nombre y el sexo civil -entendiendo éste como el sexo asignado en los registros públicos- con la identidad de género constituye un símbolo de coherencia esencial para la persona, formando parte de su integridad síquica en tanto la identidad de género de cada persona forma parte indivisible de sí. Luego, el derecho al nombre, consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos de la que Chile forma parte, debe propender a proteger la dignidad de cada persona, permitiéndole identificarse con aquel registrado y con cómo es conocido por su entorno, de manera de no menoscabar su integridad moral ni síquica.

Por otra parte, el derecho a la igualdad ante la ley, garantizado en nuestra Constitución Política, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el actual estado de la ley no está plenamente reconocido para todos los ciudadanos. El reconocimiento legal de la identidad de género del individuo busca acabar con la discriminación basada en género, asegurando un trato digno e igualitario a todas las personas. La discriminación por motivos relacionados a la identidad de género incluye todo tipo de exclusiones, omisiones, distinciones o preferencias basadas en la misma, que tenga como finalidad o resultado el menoscabo de la igualdad ante la ley o el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos.

El presente proyecto de ley pretende mejorar significativamente la calidad de vida de un sector altamente vulnerable y excluido socialmente. Esta marginación se debe en gran parte a la evidente incongruencia entre su identidad de género y sus documentos registrales, por lo que puede ser combatida asegurando el derecho a modificar los documentos emitidos por el Estado. De esta manera,

se asegurará el libre derecho de la identidad, a la integridad física y síquica, a la igualdad ante la ley, a la dignidad, entre otros principios fundamentales para un Estado democrático.

La orientación sexual o identidad de género que cada persona defina para sí, es esencial para su personalidad, constituyendo un aspecto fundamental de su autodeterminación, su dignidad y su libertad; por ende, la posibilidad del cambio de sexo y nombre registral por incongruencia con la identidad de género no puede estar supeditada a exámenes médicos ni periciales que afecten la dignidad e integridad del individuo. Existen diversos testimonios de personas que han recibido un trato denigrante, abusivo y discriminatorio mientras se realizaban los exámenes exigidos obligatoriamente por Tribunales del país. Ello lleva a concluir que ninguna persona podrá ser forzada a someterse a procedimientos médicos, sino a una evaluación psicológica que dé cuenta de la cabal comprensión del significado e implicancias del cambio de nombre y sexo registral. Por tanto, se excluyen cirugías de reasignación de sexo, esterilización o terapia hormonal como requisito para el reconocimiento legal de su identidad de género, ya que estos tratamientos resultan abiertamente contrarios al derecho a la integridad física y síquica de la persona.

El hecho de no corresponder la información registrada en los documentos con la identidad de género expone a las personas en esta situación a ser víctimas de abusos y discriminaciones de las más diversas índoles, con la evidente consecuencia de que no puedan ejercer libremente los derechos y garantías que el ordenamiento jurídico les asegura. Esta situación ha sido verificada por respetados organismos internacionales de los que nuestro país participa. El presente proyecto de ley hace eco a los llamados realizados por Naciones Unidas (Declaración de la Organización de Naciones Unidas “Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género” Aprobada el 18 de diciembre de 2008. Apoyada por Chile) y la Organización de Estados Americanos (Resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos AG/ RES. 2600 X/L-O/10. Aprobada en la cuarta sesión plenaria de la Asamblea General, celebrada el 8 de junio de 2010). Ambos organismos, tras rechazar enérgicamente los actos de violencia y discriminación con motivo de la identidad de género, instan a los Estados a tomar todas las medidas necesarias para asegurar que no se vuelvan a cometer actos de este tipo o violaciones de cualquier otro derecho humano por motivos vinculados a la identidad de género. Así mismo, llama a los Estados miembros a considerar medios para combatir la discriminación por estas causas y a tomar las medidas necesarias, tanto legislativas como administrativas, para promover y asegurar los derechos humanos de toda persona, sin distinción.

Consideraciones científicas

Para entender mejor las disposiciones que se someten a consideración mediante este proyecto de ley, es necesario primero darle la relevancia que corresponde a la noción de identidad de género. Por ello, para la acertada comprensión de la categoría “identidad de género” resulta de utilidad su interpretación analítica, esto es, la disgregación de sus partes.

De este modo, siguiendo a Gayle Rubin (RUBIN, Gayle. "El tráfico de mujeres. Notas para una 'economía política del género'", en: *Nueva antropología*, N° 30, noviembre-diciembre, 1986), el género puede definirse como:

“El conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en el que se satisfacen esas necesidades humanas transformadas”.

Por su parte, Teresita De Barbieri reformula el alcance del género en los siguientes términos (DE BARBIERI, Teresita. “Sobre la categoría de género. Una introducción teórico-metodológica”, en: *Debates en Sociología*, N° 18, 1993):

“En otras palabras: los sistemas de género/sexo son los conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual anátomo-fisiológica y que dan sentido a la satisfacción de los impulsos sexuales, a la reproducción de la especie humana y en general al relacionamiento entre las personas.”

Por otro lado, de acuerdo a la Lagarde (APSIQUE. Psicología en la Universidad de Concepción. “Trastornos de la identidad sexual: Apuntes de textos”. [visitado el 3 de octubre de 2010] Disponible en Wolrd Wide Web <<http://www.aloja.cl/pdf/identidad.pdf>>), la identidad es:

“[e]l sistema unitario de representaciones de sí, elaboradas a lo largo de la vida de las personas, a través de las cuales se reconocen a sí mismas y son reconocidas por los demás como individuos particulares y miembros de categorías sociales distintivas.”

Por último, para Norma Fuller una de las dimensiones principales de la identidad es el género (FULLER, Norma. “Dilemas de la femineidad: mujeres de clase media en Perú”. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1993):

“Muy temprano en el desarrollo de la identidad personal los sujetos se piensan en tanto mujeres u hombres. En este sentido la identidad de género es la elaboración simbólica que cada cultura constituye a partir de la categorización de las personas en diferentes sexos. Dicha codificación implica que nuestro conocimiento sobre el sexo no corresponde exclusivamente a las características anatómicas, sino más bien, es el saber que asigna significados a las diferencias corporales.”

El informe sobre el estado de la cuestión en los países europeos de la Organización Transrespect Versus Transphobia (TRANSRESPECT VS. TRANSPHOBIA. “Derechos Humanos e identidad de género”. Informe temático de Thomas Hammarberg, Consejo de Europa, Comisario de Derechos Humanos) señala:

“La noción de “identidad de género” ofrece la oportunidad de entender que el sexo asignado al nacer puede no concordar con la identidad de género innata que los niños desarrollan cuando crecen. Hace referencia a la experiencia de género interna e individual de cada persona, sentida a un nivel profundo, que puede o no corresponderse con el sexo asignado al nacer, e incluye el sentido personal del cuerpo y de otras expresiones de género como la forma de vestir, el habla y los gestos.”

Ahora bien, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición delimita la complejidad del transexualismo como sigue (Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Grupo de Trabajo sobre Trastornos de Identidad de Género. “Trastornos de Identidad de Género. Guía clínica para el diagnóstico y tratamiento):

“Los transexuales tienen la convicción de pertenecer al sexo opuesto al que nacieron, con una insatisfacción (“disforia”) mantenida por sus propios caracteres sexuales primarios y secundarios, con un profundo sentido de rechazo [...]. Desde la infancia su identidad mental es distinta a su fenotipo genital. Son mujeres que se sienten "atrapadas" en cuerpos de hombre, y hombres que se sienten "atrapados" en cuerpos de mujer; sin trastornos psiquiátricos graves que distorsionen la percepción de la realidad, que necesitan ser aceptados social y legalmente en el género elegido.”

Por último, es importante señalar que la identidad de género no dice relación con trastornos patológicos, como lo han reiterado los movimientos mundiales a favor de la despatologización del transexualismo (RED INTERNACIONAL POR LA DESPATOLOGIZACIÓN TRANS. “Manifiesto”. <http://www.stp2012.info/old/es/manifiesto>);

“Actualmente la transexualidad se considera un “trastorno de identidad sexual”, patología mental clasificada en el CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud) y en el DSM-IV-R (Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales de la Asociación de Psiquiatría Norteamericana). Estas clasificaciones son las que guían a los y las psiquiatras de todo el mundo a la hora de establecer sus diagnósticos. En ellas se comete un error poco casual: la confusión de los efectos de la transfobia con los de la transexualidad. Se invisibiliza la violencia social que se ejerce sobre quienes no se adecuan a las normas de género. De este modo, se ignora activamente que el problema no es la identidad de género, es la transfobia.”

De todo lo anterior se puede colegir que la identidad de género es una construcción social que sobrepasa el mero sustrato biológico, y que en ningún caso está relacionada con una condición patológica. Antes bien, su patologización ha devenido producto de la transfobia.

Esta transfobia se manifiesta en intolerancia difusa en todos los sectores sociales, en particular los profesionales de la salud, y repercute de manera grave en la integridad física, síquica y moral de las personas trans, integridad la cual nuestra Carta Fundamental y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos consagran y protegen.

De esta problemática han tomado consciencia tanto legislaciones comparadas como la jurisprudencia nacional, la cual ha debido suplir las deficiencias de la actual legislación en nuestro país.

Normativa y jurisprudencia nacional

El cambio de nombre se admite bajo la normativa vigente, en la ley 17.344 de 22 de septiembre de 1970, con las causales establecidas en las letras a), b) y c)¹. En atención al cambio de nombre solicitado

¹ Ley 17.344, “Artículo 1°- Toda persona tiene derecho a usar los nombres y apellidos con que haya sido individualizada en su respectiva inscripción de nacimiento.

por personas en cuanto a su identidad de género, las sentencias emitidas destacan las letras a) y b) del artículo señalado, es decir, cuando el nombre sea ridículo, risible o menoscaben moral o materialmente, y cuando la persona haya sido conocida por mínimo 5 años con un nombre distinto.

El problema se plantea sobre la aplicación de esta ley, en el sentido de que no acoge los planteamientos señalados, siendo fuente de discriminación. Sin embargo, en algunas ocasiones, los tribunales del país han admitido el cambio de nombre, aduciendo la inexistencia de regla específica sobre la materia y teniendo en cuenta que el sentenciador se atuvo a la identidad de género del solicitante (Primer Juzgado Civil de Rancagua, sentencia de 27 de abril de 2007).

Ello significa, en resumidas cuentas, la existencia de un vacío legal que debe ser llenado, lo cual es propuesto mediante esta ley. Ello contando con los principios que ya se han reseñado, nos da como resultado, un procedimiento expedito, que cumpla con las exigencias de respetar los derechos fundamentales del solicitante. Por ello es que no se exigen exámenes físicos, sino sólo se atiende al concepto de identidad de género y la capacidad de comprensión de lo que significa el cambio en los registros.

Refuerza el respeto a la identidad de género en cuanto al cambio de nombre y sexo civil, la sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena de 10 de Enero de 2006, que ordenó al Registro Civil practicar la rectificación de nombre y sexo en sus registros, teniendo en cuenta que la persona transexual solicitante poseía conducta correspondiente a la de un individuo de otro sexo, habiendo el Registro Civil deducido oposición a dicha rectificación.

De lo expuesto, es posible colegir que la rectificación de nombre y sexo en su caso, se ha conseguido sólo sectorialmente, sin que exista una ley que regule de manera idónea la materia, dejando a criterio del juez la reasignación del sexo y nombre, lo cual reviste extrema gravedad en atención a que se trata

Sin perjuicio de los casos en que las leyes autorizan la rectificación de inscripciones del Registro Civil, o el uso de nombres y apellidos distintos de los originarios a consecuencia de una legitimación, legitimación adoptiva o adopción, cualquiera persona podrá solicitar por una sola vez, que se la autorice para cambiar sus nombres o apellidos, o ambos a la vez, en los casos siguientes:

- a) Cuando unos u otros sean ridículos, risibles o la menoscaben moral o materialmente;*
- b) Cuando el solicitante haya sido conocido durante más de cinco años, por motivos plausibles, con nombres o apellidos, o ambos, diferentes de los propios, y*
- c) En los casos de filiación no matrimonial o en que no se encuentre determinada la filiación, para agregar un apellido cuando la persona hubiera sido inscrita con uno solo o para cambiar uno de los que se hubieren impuesto al nacido, cuando fueren iguales.”*

de derechos fundamentales debidamente reconocidos y consagrados a nivel internacional y nacional. El dejar a criterio del juez el otorgamiento del cambio de nombre hace que el ejercicio de este derecho sea arbitrario y carezca de parámetros objetivos, lo que atenta los derechos fundamentales de la persona.

Situación Internacional

A nivel internacional, el reconocimiento de la identidad de género, concretado en la reasignación de sexo y cambio de nombre se ha recogido en diversos países de la Unión Europea. En el año 2007, España aprobó ley que permite a los transexuales cambiar de nombre y sexo en el Registro Civil sin someterse a cirugía.

Dicha ley permite el cambio en la medida que un médico o psicólogo clínico colegiado acredite la “disforia de género”, entendiéndolo no como una enfermedad, sino como la mera disconformidad con el sexo genital. El cambio de sexo y nombre obliga a quien lo obtenga a pedir la emisión de un nuevo DNI (Documento Nacional de Identidad) ajustado a la inscripción registral rectificadora, conservando siempre el mismo número del documento.

Las personas que ya se hayan sometido a la cirugía de reasignación sexual no tienen que cumplir esos requisitos, y los menores de edad no pueden acceder al cambio registral del sexo.

Para la reasignación de sexo, como se señaló, se precisa un informe positivo por parte de un profesional en el que reconozca la necesidad de la persona a adoptar el nuevo rol de género. En dicho informe se hace constar además que la persona no presenta ningún trastorno mental que la induzca a tomar dicha decisión. Además, se recomienda que la persona pase durante uno o dos años un test de vida real o experiencia de vida real, que consiste en comenzar a vivir de acuerdo a la propia percepción de la identidad sexual, es decir, conforme al rol de género del sexo contrario al que le fue asignado a la persona transexual en el momento del nacimiento.

En cuanto al sexo legal, en España, la ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas permite el cambio de la mención de sexo en los documentos oficiales, incluyendo el registro civil y el D.N.I., siempre que se cumplan los requisitos expuestos en la ley, es decir tener la nacionalidad española, ser mayor de edad y poseer capacidad suficiente, acreditada por los correspondientes informes médicos. El cambio se realiza por vía

administrativa presentando en el registro civil correspondiente al lugar de residencia del interesado una solicitud acompañada de la documentación correspondiente.

Lo anterior se corresponde con el movimiento mundial que busca la aceptación de la realidad de los transexuales dentro de la sociedad, movimiento impulsado por Francia, los Países Bajos y Noruega.

Por todo lo ya expuesto, es decir, las dificultades de las personas transexuales, su relevancia social y jurídica y el tratamiento deficiente de la transexualidad en la legislación nacional, es que somete el siguiente:

Proyecto de Ley

“Artículo 1.- Modifícase el artículo cuarto del Decreto con Fuerza de Ley N° 1-2000, del Ministerio de Justicia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 17.344 que autoriza el cambio de nombre y apellido en los casos que indica, en el siguiente sentido:

1.- En el artículo 1°:

a) Elimínase la conjunción “y” de la letra b).

b) Reemplázase el punto seguido (.) de la letra c) por la expresión “, y”.

c) Agrégase la siguiente letra, a continuación de la letra c):

“d) Cuando se presente incongruencia entre los datos registrados y la identidad de género de la persona solicitante. Para esto, la persona debe haber sido conocida durante más de cinco años con un nombre y sexo distintos al registrado.

El cambio de nombres realizado por este medio deberá incluir el cambio del sexo registrado en la inscripción del Registro Civil, para adecuarlo a la identidad de género del solicitante. En todo caso, el cambio del sexo en la inscripción del Registro Civil podrá ser renunciada por el solicitante durante el procedimiento, al momento la solicitud.

Para determinar el cumplimiento de las exigencias de esta letra no podrá pedirse la realización de cirugías de reasignación sexual o tratamiento hormonal, ni podrá ser solicitado por el juez la realización de peritajes médicos de cualquier tipo, en especial psiquiátricos, debiendo realizarse sólo un informe psicológico que certifique que la persona solicitante sea capaz de comprender las consecuencias del cambio solicitado, sin perjuicio de la prueba que deba presentarse para la acreditación del transcurso del plazo en que el solicitante haya sido conocido con un nombre y sexo diferentes al registrado”.

d) En el inciso quinto, intercálase, entre las frases, “para solicitar el cambio o supresión de los nombres o apellidos” y “a que se refiere esta ley”, la siguiente: “o el cambio de sexo en la inscripción del Registro Civil”.

2.- En el artículo 2:

a) Agrégase, en el inciso tercero, a continuación de la frase, “la indicación de los nombres y apellidos que éste pretende usar en reemplazo de los propios.” la oración: “El extracto también tendrá que mencionar el cambio de sexo en la inscripción del Registro Civil, en el caso de la letra d) del artículo 1º, a menos que se haya solicitado la renuncia a ello.”

b) Reemplázase, en el inciso séptimo, la expresión “No se autorizará el cambio de nombre o apellido” por “No se autorizará el cambio de nombre, apellido o sexo”.

3.- Intercálase, en el inciso primero del artículo 3º, entre las frases “el cambio de nombres o apellidos, o de ambos a la vez, o la supresión de nombres propios” y “deberá cumplirse de acuerdo con el DFL. N° 2.128, de 10 de agosto de 1930”, la siguiente: “, o la modificación del sexo en la inscripción del Registro Civil”.

4.- En el artículo 4º:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

“Una vez modificada la partida de nacimiento, la persona que haya cambiado su nombre, apellidos o sexo en la inscripción del Registro Civil, de acuerdo con lo que establecen los artículos anteriores, sólo podrá usar, en el futuro, en todas sus actuaciones, su nuevo nombre propio, apellidos o dicho cambio de sexo en la inscripción referida, en la forma ordenada por el juez.

b) Intercálase, en el inciso segundo, entre las frases, “El cambio de apellido” y “no podrá hacerse extensivo” la siguiente: “o de sexo en la inscripción del Registro Civil”.

5.- Sustitúyese el artículo 5º por el siguiente:

“El uso malicioso de los primitivos nombres, apellidos o sexo en la inscripción del Registro Civil, y la utilización fraudulenta del nuevo nombre, apellido o sexo en la inscripción referida, para eximirse del cumplimiento de obligaciones contraídas con anterioridad al cambio de ellos, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado mínimo.”

6.- Agréganse los siguientes artículo 6º y 7º, pasando el artículo 6º a ser el artículo 8º

“Artículo 6º.- Para los efectos de la presente ley, se entenderá por identidad de género la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

Artículo 7º.- Una vez firme y ejecutoria la sentencia que rectifica el sexo en la inscripción del Registro Civil, la persona gozará de todos los derechos inherentes a su nuevo sexo legal.”

Artículo 2.- Todas las personas tienen derecho a ser tratadas y reconocidas de acuerdo a su identidad de género, con independencia de su sexo biológico, respetando el libre desarrollo de su personalidad y dignidad. Ninguna persona podrá ser objeto de discriminación, penalización o castigo por motivo de su identidad de género.

La identidad de género debe entenderse como parte del libre desarrollo de la personalidad, y nunca como una enfermedad mental.

El principio de la no discriminación debe ser la base del trato de todo funcionario público. Por ello, en el cumplimiento de sus funciones, dichos funcionarios deberán tratar a las personas de acuerdo a su identidad de género.”

Artículo transitorio.- Las personas que hayan optado por el cambio de nombre legal con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, podrán acogerse a las nuevas disposiciones de la Ley N° 17.344, en el sentido de solicitar que se modifique únicamente su sexo registral de acuerdo a la causal establecida en la letra d) que se incorpora por la presente, debiendo respetarse el procedimiento establecido al efecto.

Esta facultad sólo operará en los casos en que se haya otorgado el cambio de nombre por resolución que ya haya pasado en fuerza de cosa juzgada, y en la cual no haya habido pronunciamiento o éste haya sido desfavorable al cambio de sexo legal.

El procedimiento nuevo no se acumulará al ya tramitado con anterioridad y no podrán exigirse las repeticiones de las pericias practicadas en éste.